

## "M-19: responsable"

Una semana después del holocausto, a través del decreto 3800, el gobierno de Belisario Betancur creó un Tribunal Especial para esclarecer lo sucedido. Los juristas Carlos Upegui y Jaime Serrano, durante seis meses examinaron más de 12.000 folios y recabaron muchos testimonios.

El Tribunal Especial concluyó que el M-19 fue el único responsable de lo sucedido, que no hubo evidencia de alianzas entre guerrilleros y narcotraficantes para perpetrar el ataque, que el presidente Betancur al menos debió atender el diálogo telefónico con el presidente de la Corte, Alfonso Reyes, y que los militares cumplieron órdenes impartidas.

Pero el Tribunal nació sin poder sancionatorio. Se resignó a recomendar acciones penales. Para constancia histórica quedaron 64 páginas en el Diario Oficial del 17 de junio de 1986.

## "Un acto de gobierno"

Dos denuncias se presentaron en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el presidente Betancur y su ministro de Defensa Miguel Vega Uribe. En particular, el procurador Carlos Jiménez Gómez calificó lo sucedido como "un acto de guerra" y solicitó que se les juzgara por desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario.

La Comisión de Acusación resolvió el caso el 16 de julio de 1986. Concluyó que no tenía elementos de juicio para cuestionar al presidente Betancur porque obró en un "típico acto de gobierno". Sin embargo reconoció que el país "no se cansará de examinar lo ocurrido y de examinar el porqué de su manejo", en medio de la intemperancia y la indiferencia. Firmaron el documento Horacio Serpa, Carlos Mauro Hoyos y Darío Ordóñez.

## Faltaron las capturas

Ocho jueces asumieron la investigación penal desde el 7 de noviembre. Durante cuatro años se sumaron múltiples pesquisas, testimonios y pruebas técnicas. Lo que faltaron fueron capturas. El 31 de enero de 1989, el juez 30 de instrucción criminal calificó el sumario y llamó a juicio a 88 guerrilleros por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión y falsedad. Respecto al incendio concluyó que fue intencional, pero que no se supo quién lo perpetró. Además precisó que quedó descartada la participación del narcotráfico. Sin embargo, cuando se emitió la decisión judicial ya estaban en marcha el proceso de paz con el M-19. Después vino la ley 77 de 1989 que indultó a los guerrilleros, y los graves cargos contra los insurgentes, contenidos en la providencia de la justicia penal, pasaron al archivo.

## Violación al D.I.H

La reacción de las Fuerzas Militares para recuperar el Palacio de Justicia suscitó una investigación disciplinaria en la Procuraduría. El proceso se adelantó contra el entonces comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Jesús Armando Arias, y el comandante del B-2 de inteligencia militar, coronel Edilberto Sánchez. El 28 de septiembre de 1990, la Procuraduría, entonces en cabeza de Alfonso Gómez Méndez, ordenó la destitución de los dos oficiales del Ejército. Al general Arias por desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y al coronel Sánchez por graves episodios de exceso de fuerza y desaparición forzada. La decisión fue confirmada en octubre de 1990. La sanción derivó en un largo debate político. El general Arias demandó su destitución ante la justicia entendiendo a años después ganó el pleito.

## "Simplemente toleró"

En desarrollo de sus investigaciones, la justicia penal pidió que se indagara la conducta del entonces director de la Policía, general Víctor Delgado Mallarín, por el presunto delito de desobediencia militar, porque supuestamente se negó a cumplir el orden de suspender el operativo de ingreso al cuarto piso del Palacio de Justicia. La Corte Suprema de Justicia asumió el caso y el 24 de octubre de 1990 resolvió la investigación contra el oficial. De paso cuestionó la tática utilizada por la Fuerza Pública, que no distinguió entre secuestrados y secuestradores, y fustigó al presidente Betancur, de quien dijo que "no ordenó nada, simplemente toleró". Pero el 7 de febrero de 1991, la misma Corte Suprema admitió que el caso ya había prescrito. Como constancia histórica, pidió que, más allá del indulto concedido al M-19, se esclareciera para la historia la responsabilidad de lo sucedido en el Palacio de Justicia.

## El Estado indemnizó, pero nadie fue castigado

# Los tentáculos de la impunidad en el holocausto

La desgarradora imagen del templo de la justicia arrasado por el fuego el 6 de noviembre de 1985. / EL ESPECTADOR

Más allá de la controversia entre el presidente Alvaro Uribe Velez y los ex líderes del M-19, el holocausto del Palacio de Justicia es una herida que no cicatriza. La paz pactada debe respetarse, pero eso no implica perder la memoria.

JORGE CARDONA ALZATE

**E**l holocausto del Palacio de Justicia es un estigma que cada 6 de noviembre desgarrará la memoria del país. Por el recuerdo de los magistrados inocentes muertos, y por el peso de la impunidad que empezó a gestarse en el fragor de la guerra, a muerte que durante 28 horas libraron el M-19 y las Fuerzas Militares, a esas noches de la sede de un gobierno paralizado e impotente.

Sobre las ruinas del templo de la justicia arrasado por el fuego, entre los gritos abogados de los desaparecidos o de los rescatados de ese infierno, se fueron multiplicando los folios de interminables expedientes que nunca lograron castigar a los

responsables del más grave episodio de violencia en la historia contemporánea del país. Una herida que, 19 años después, aún no se cicatriza.

La evidencia fue el polémico comentario del presidente Uribe en Miami: "El M-19 quemó el Palacio de Justicia en asociación con el narcotráfico y está indultado". Una expresión que, cierta o no, removió los escombros del pasado. Los ex guerrilleros del M-19, hoy líderes políticos, ofrecieron renunciar al indulto y reclamaron una comisión de la verdad. Los familiares de las víctimas siguen clamando justicia.

Ayer el Gobierno precisó que no pretende revocar el indulto al M-19 ni desconocer la conveniencia política del proceso de paz. Pero insistió en que si hubo indulto por delitos atro-

ces como el secuestro, y que nunca se exigió a cambio verdad, justicia y reparación. Los ex guerrilleros del M-19 pretenden que el debate no se agote que, de una vez por todas y para siempre, se le aclare al país qué sucedió en el Palacio de Justicia.

Sin embargo, mientras se aclara el rumbo de la controversia política, cabe recordar que en ocho estrados de la justicia se examinó el holocausto y que, contadas excepciones, la impunidad extendió su manto. Por eso, ahora o después, no cabe duda que respecto a los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, la memoria colectiva sigue intacta. Nadie puede olvidar lo que pasó en el Palacio de Justicia. Son 111 colombianos muertos que imponen el deber de recordar.

## LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

### "Yo no veo ningún debate"

Enrique Rodríguez  
Padre de Cortis Rodríguez, el menor de los niños del Palacio.

"Eso de saber qué está pasando o qué pasó, se lo resumo en una sola cosa: impunidad. De todas formas me parece muy interesante que se abra el debate, pero hay que hacer las cosas con claridad.

Yo no veo ningún debate. Es una escaramuza para sacar del bulto a los responsables. Para mí, el único responsable es el Estado colombiano, en cabeza del ex presidente Belisario Betancur, quien permitió que todo eso se diera para echarle la culpa a la guerrilla. Es necesario que haya una investigación seria para establecer la verdad. Nosotros llevamos 19 años de estar preguntando y pensando qué hizo el Gobierno con los desaparecidos del Palacio de Justicia. En mi caso, ocho trabajadores de la cafetería y otras tres personas que estaban en el lugar por accidente".

### "Lo que dijo Uribe es cierto"

Carlos Medellín  
Ex ministro de Justicia y hijo de uno de los magistrados asesinados.

"Lo que ha dicho el Presidente es absolutamente cierto: no se puede construir un proceso de paz repitiendo los errores del pasado, es decir, amnistiendo e indultando a personas por fuera de la ley sin que se examinen y se estudien temas tan delicados como el narcotráfico.

El M-19 no puede pretender dirigir los destinos de este país sobre los muertos del Palacio de Justicia y sobre las relaciones con Pablo Escobar; porque este tema no se investigó. Cuando uno tiene relación con el narcotráfico, asesina a magistrados por la espalda, quemamos los expedientes de extradición que habían llegado el día anterior a la Corte Suprema, no puede uno pretender nada, por lo menos con la frente en alto".

## Actos de ferocidad

Con base en el Código de Procedimiento Penal vigente, el 15 de mayo de 1992, una jueza sin rostro consideró que varias de las conductas asumidas por el M-19 en el Palacio de Justicia correspondían a delitos de terrorismo, y a pesar de que la mayoría de ex guerrilleros ya eran líderes políticos y estaban cobijados por la ley de indulto, expidió medidas de aseguramiento en su contra.

La jueza sin rostro sostuvo que el incendio había sido provocado por el M-19 y que, además, esta organización había ocurrido en actos de ferocidad y barbarie que no podían ser indultados. Igualmente, dispuso que se remitiera el expediente a la Corte Suprema para que se reabiera una investigación contra el ex presidente Belisario Betancur y contra el ex ministro de Defensa Miguel Vega Uribe.

La situación generó un escándalo político. Pero el Congreso agilizó un instrumento jurídico para superar el dilema. Expidió una norma que garantizara la cosa juzgada en el episodio del Palacio de Justicia. El proceso de la jueza sin rostro se cayó y la función terminó investigada penal y disciplinariamente.

## Orden presidencial

El principio de la obediencia debida fue fundamental para examinar la conducta de los oficiales que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia. Por eso, en doble instancia, la Justicia Penal Militar absolvió al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Edilberto Sánchez Rubiano. La razón: actuaron acatando órdenes del comandante de las Fuerzas Militares, el Presidente de la República.

El fallo de primera instancia fue cuestionado por el Ministerio Público, y el Tribunal Superior Militar, en octubre de 1994, le puso fin al expediente ratificando la absolución de los oficiales cuestionados. Para la justicia penal militar no hubo prueba alguna de que los militares hubiesen ocasionado el incendio de la edificación, como tampoco de que las Fuerzas Armadas hubiesen causado la muerte de algunos rehenes o hubiesen ordenado la desaparición de personas.

La justicia militar insistió en que "la recuperación del Palacio de Justicia y salvamento de los rehenes, fue debidamente controlada y monitoreada".

## La Nación condenada

La mayoría de las familias de las víctimas del Palacio de Justicia demandó a la Nación por falla en el servicio. Los alegatos se sustentaron en demostrar que, a pesar de las amenazas que existían contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que además se había detectado un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, la fuerza pública no protegió la integridad de los juristas.

A partir de 1992, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca empezó a otorgarle la razón a los demandantes. En 1993, el Consejo de Estado falló la primera de múltiples sentencias que reconocieron la responsabilidad del Estado, no sólo por la desprotección de los magistrados de la Corte Suprema antes del asalto guerrillero del 6 de noviembre, sino por el "equivocado, improvisado y desorganizado" operativo militar de recuperación del Palacio de Justicia.

La justicia contenciosa censuró la actuación del M-19, pero igualmente cuestionó la inacción de las Fuerzas Militares y "el desconocimiento absoluto de los más elementales D.H".

## Los desaparecidos

El Tribunal Especial creado por el gobierno Betancur fue el primero en admitirlo: El personas desaparecieron en el holocausto del Palacio de Justicia. Un misterio que empezó a esclarecerse cuando se constató que la mayoría de las personas cuyo rostro se perdió definitivamente, trabajaba o acudía por algún negocio a la cafetería del Palacio de Justicia.

El hallazgo de algunos documentos probó parcialmente que los desaparecidos sí habían estado en el Palacio en el momento de la confrontación. Pero fue necesario que la justicia contenciosa lo comprobara. Primero el Tribunal de Cundinamarca en 1993 y después el Consejo de Estado condenaron a la Nación por este hecho, pero nunca se pudo determinar cómo desaparecieron los colombianos.

En el 2000, la Fiscalía, con base en pruebas de ADN y de sangre, constató que uno de los rostros de la tragedia depositados en fosa común en el cementerio del sur correspondían al cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia.